RESOLUCION PARTICULAR

VISTO:

El Proceso Virtual N° 00, el Expediente N° 00 y otros del Sumario Administrativo instruido al contribuyente **NN** con **RUC 00**, en adelante (**NN**), y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Orden de Fiscalización N° 00 notificada el 29/06/2023, a través de la Dirección General de Grandes Contribuyentes (**DGGC**), la actual Gerencia General de Impuestos Internos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en adelante (**GGII**), dispuso el control de las obligaciones del IRACIS General de los ejercicios fiscales 2018 y 2019; del IVA General de los periodos fiscales de 01/2018 a 05/2020; de 01 a 03, 05, de 10 a 12/2021, de 01 a 09 y 12/2022; y del IRE General de los ejercicios fiscales de 2020 a 2022 de **NN**, específicamente respecto a las facturas emitidas por los contribuyentes **XX** con **RUC 00**, **XX** con **RUC 00** y **XX** con **RUC 00**, para el efecto le requirió las facturas de compras originales emitidas por los proveedores citados, los contratos firmados con especificación del lugar de prestación, adjuntando los documentos que evidencien físicamente los servicios prestados; las formas de pago de los comprobantes de compras y en caso de haber sido pagados con cheque, especificar el N° de cheque, beneficiario, banco y N° de cuenta corriente, incluyendo otros documentos relacionados a la operación, tales como contratos firmados, recibos de dinero y/o pagarés en caso de que corresponda; Libro Compras y ventas del IVA, en soporte digital en formato de planilla electrónica (Excel); Libros Diario y Mayor en medio magnético formato Excel; correspondientes a los periodos fiscales controlados; lo cual fue cumplido parcialmente por el contribuyente.

La Fiscalización tiene como antecedente las investigaciones surgidas a partir del Informe CITGR/IT N° 00/2022, correspondiente a la Coordinación de Investigación Tributaria y Gestión de Riesgos (**CITGR**), en el cual se exponen antecedentes relacionados a las verificaciones realizadas a contribuyentes que habrían utilizado facturas de la supuesta proveedora: **XX** y otros proveedores inconsistentes, las que podrían ser de contenido falso, entre los que se encuentra el contribuyente **NN** Asimismo, a través del Informe DPO N° 00/2023 del Departamento de Planeamiento Operativo (**DPO**) de la **DGGC** obrante en el expediente N° 00, se señaló que mediante notificaciones, entrevistas y requerimientos de documentaciones a los supuestos proveedores del contribuyente, se detectaron indicios de que no declaró la totalidad de sus ingresos y utilizó facturas de contenido falso para respaldar sus créditos, costos y gastos, por tal motivo el **DPO** recomendó la apertura de una Fiscalización Puntual a **NN**.

Durante la Fiscalización, los auditores de la **GGII** realizaron entrevistas informativas a los supuestos proveedores del contribuyente, teniendo como resultado que algunos de ellos desconocen las operaciones comerciales, así como los conceptos detallados en los comprobantes presentados por **NN** a la Administración Tributaria (**AT**). Por otra parte, otros no fueron localizados en el domicilio declarado en el RUC, y luego de consultar a los vecinos, comerciantes de cada zona y a la administración del Mercado Municipal de Abasto, señalaron que desconocían a los mismos, tampoco se visualizó negocio alguno relacionado al giro comercial declarado por estos, y conforme a los indicios obtenidos en las diligencias realizadas, no se pudo comprobar la veracidad de las operaciones del contribuyente con los supuestos proveedores **XX**, **XX** y **XX**.

Considerando las evidencias obtenidas, los auditores de la **GGII** constataron que el contribuyente, utilizó facturas de presunto contenido falso en los ejercicios y periodos fiscales las cuales no reflejan la realidad de los hechos económicos, en consecuencia, ha obtenido un beneficio indebido, incidiendo fiscalmente en las obligaciones tributarias del IVA General, IRACIS General e IRE General de los periodos y ejercicios fiscales verificados, en contravención a lo dispuesto en los Arts. 7°, 22, 85 y 86 de la Ley N° 125/1991, en adelante (la Ley) modificada por la Ley N° 2421/2004, los Arts. 8°, 85 y 86 de la Ley N° 6380/2019, el Art. 68 del

Anexo al Decreto N° 1030/2013, por lo que procedieron a determinar el IRACIS General, IRE General e IVA General dejados de ingresar surgiendo saldos a favor del Fisco.

<p>Dadas estas circunstancias, los auditores de la GGII concluyeron que NN ha declarado montos menores de sus ventas en comparación a lo declarado por los contribuyentes informantes así como también omitió declarar sus ventas ya que obtuvo un beneficio indebido al lograr reducir la base imponible del IVA General, del IRACIS General y del IRE General en perjuicio del Fisco al respaldar sus costos, gastos y compras con facturas de contenido falso, lo que implicó el no ingreso de los impuestos correspondientes al hacer valer ante la AT formas manifiestamente inadecuadas a la realidad de los hechos gravados por lo que sugirieron calificar su conducta conforme a lo dispuesto en el Art. 172 de la Ley; por lo que, recomendaron la aplicación de la multa entre uno (1) y tres (3) veces el monto del tributo defraudado o pretendido defraudar. Asimismo, percibir sobre la suma del impuesto que se liquide, las multas en concepto de mora e intereses establecidos en el Art. 171 de la Ley. Todo ello de acuerdo al siguiente detalle: Impuesto</p>	Ejercicio Fiscal	Monto Imponible	Impuesto a Ingresar	Multa
511 - AJUSTE IRACIS	2018	2.940.968.791	294.096.879	LA MULTA POR DEFRAUDACIÓN SERÁ GRADUADA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 175, CONFORME A LOS
511 - AJUSTE IRACIS	2019	1.480.328.581	148.032.858	
800 - AJUSTE IRE GENERAL	2020	159.277.249	15.927.725	

800 - AJUSTE IRE GENERAL	2021	1.244.796.734	124.479.673	PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS ARTS. 212 Y 225 DE LA LEY.
800 - AJUSTE IRE GENERAL	2022	4.777.297.759	477.729.776	
521 - AJUSTE IVA	ene-18	77.114.280	3.855.714	
521 - AJUSTE IVA	feb-18	168.495.580	8.424.779	
521 - AJUSTE IVA	mar-18	228.472.700	11.423.635	
521 - AJUSTE IVA	abr-18	42.413.840	2.120.692	
521 - AJUSTE IVA	may-18	102.039.340	5.101.967	
521 - AJUSTE IVA	jun-18	159.628.760	7.981.438	
521 - AJUSTE IVA	jul-18	132.067.000	6.603.350	
521 - AJUSTE IVA	ago-18	157.205.280	7.860.264	
521 - AJUSTE IVA	sept-18	200.431.200	10.021.560	
521 - AJUSTE IVA	oct-18	220.839.360	11.041.968	
521 - AJUSTE IVA	nov-18	924.438.100	46.221.905	
521 - AJUSTE IVA	dic-18	523.993.220	26.199.661	
521 - AJUSTE IVA	ene-19	212.839.340	10.641.967	
521 - AJUSTE IVA	feb-19	71.965.080	3.598.254	
521 - AJUSTE IVA	mar-19	32.174.900	1.608.745	
521 - AJUSTE IVA	abr-19	27.989.600	1.399.480	
521 - AJUSTE IVA	may-19	69.927.260	3.496.363	
521 - AJUSTE IVA	jun-19	52.100.000	2.605.000	
521 - AJUSTE IVA	jul-19	113.375.140	5.668.757	
521 - AJUSTE IVA	ago-19	362.975.660	18.148.783	
521 - AJUSTE IVA	sept-19	79.738.420	3.986.921	
521 - AJUSTE IVA	oct-19	151.685.940	7.584.297	
521 - AJUSTE IVA	nov-19	113.960.800	5.698.040	
521 - AJUSTE IVA	dic-19	162.722.340	8.136.117	
521 - AJUSTE IVA	ene-20	196.398.460	9.819.923	
521 - AJUSTE IVA	feb-20	124.156.260	6.207.813	
521 - AJUSTE IVA	abr-20	70.195.800	3.509.790	
521 - AJUSTE IVA	may-20	17.790.160	889.508	
521 - AJUSTE IVA	ene-21	88.097.020	4.404.851	
521 - AJUSTE IVA	feb-21	160.868.000	8.043.400	
521 - AJUSTE IVA	mar-21	79.937.120	3.996.856	
521 - AJUSTE IVA	may-21	51.289.520	2.564.476	
521 - AJUSTE IVA	oct-21	79.794.180	3.989.709	
521 - AJUSTE IVA	nov-21	258.613.660	12.930.683	
521 - AJUSTE IVA	dic-21	225.574.080	11.278.704	
521 - AJUSTE IVA	ene-22	489.914.440	24.495.722	
521 - AJUSTE IVA	feb-22	481.221.260	24.061.063	
521 - AJUSTE IVA	mar-22	711.809.180	35.590.459	
521 - AJUSTE IVA	abr-22	162.611.580	8.130.579	
521 - AJUSTE IVA	may-22	395.804.180	19.790.209	

521 - AJUSTE IVA	jun-22	364.640.580	18.232.029
521 - AJUSTE IVA	jul-22	536.224.940	26.811.247
521 - AJUSTE IVA	ago-22	311.072.760	15.553.638
521 - AJUSTE IVA	sept-22	51.672.720	2.583.636
521 - AJUSTE IVA	dic-22	549.498.180	27.474.909
TOTAL		20.398.446.334	1.550.055.772

A fin de precautelar las Garantías Constitucionales de la Defensa y el Debido Proceso, por Resolución N° 00 notificada el 27/10/2023, el Departamento de Sumarios y Recursos 2 (**DSR2**) dispuso la instrucción del Sumario Administrativo al contribuyente, conforme lo disponen los Arts. 212 y 225 de la Ley que prevén los procedimientos para la determinación tributaria y la aplicación de sanciones respectivamente, y la RG N° 114/2017 modificada por la RG N° 52/2020, por la cual se precisan aspectos relacionados con los procedimientos de Sumario Administrativo y de Recursos de Reconsideración.

Transcurrido el plazo señalado en la Ley, el contribuyente presentó su Descargo en fecha 24/11/2023 y ofreció sus pruebas. A través del Formulario N° 00 se dispuso la apertura del Periodo Probatorio notificado en fecha 05/12/2023. Posteriormente, no habiendo pruebas que diligenciar, a través del Formulario N° 00 notificado el 10/01/2024 se declaró cerrado el Periodo Probatorio y se comunicó al sumariado del plazo para la presentación de sus Alegatos, los cuales fueron presentados en fecha 23/01/2024. En consecuencia, el **DSR2** llamó a Autos para Resolver.

Todos los antecedentes agregados en el Sumario fueron analizados por el **DSR2**, conforme se expone a continuación:

El contribuyente **NN** manifestó que: "...ser contribuyente y su actividad principal compra venta de productos vegetales como ser papa cebolla, ajo y otros. En la verificación de HECHAUKA informados ventas que reflejan montos altos de compras al 10% y al 5% que ha realizado en los periodos controlados. El 31/05/2023 se presentó en la oficina de la DGGC y aclara que reconoce las ventas realizadas a varias empresas de la lista adjunta pero así los montos por facturas que superan los 40.000.000 (cuarenta) millones aproximadamente mencionan que sus talonarios de facturas se perdieron en el incendio y los demás no los ubica. En este sentido el mismo admite su calidad de comerciante con local en el mercado central del abasto, plenamente identificado, así también menciona que sufrió un incidente en u local comercial, donde fueron consumidas por las llamas talonarios de facturas y otras extraviadas, por lo que realizo la denuncia correspondiente en la comisaria 16 de esta capital, cuya copia esta adjunta al sumario. También en su declaración ha manifestado que tuvo cambio en la contabilidad de su local comercial, situaciones que podrían ocasionar errores involuntarios en la contabilidad. Comercial, donde fueron consumidas..." (sic).

Al respecto el **DSR2** señaló que, los auditores de la **GGII** concluyeron que **NN** utilizó facturas de presunto contenido falso de los proveedores, **XX, XX y XX**, las cuales no reflejan la realidad de los hechos económicos y en consecuencia obtuvo un beneficio indebido, incidiendo fiscalmente en las obligaciones tributarias del IVA General, IRACIS General e IRE General de los periodos y ejercicios fiscales controlados.

El **DSR2** confirmó esta conclusión basada en los siguientes hechos:

En entrevista informativa que se intentó realizar a **XX, XX y XX** los funcionarios de la **GII** se trasladaron hasta el domicilio declarado en el RUC, en los cuales no fueron ubicados, por lo que consultados los vecinos de la zona manifestaron no conocer a los contribuyentes; asimismo trataron de contactarlos a través de los números telefónicos que constan en el Sistema de Gestión Tributaria Marangatú (**SGTM**) sin embargo tampoco fue posible, ya que los teléfonos se encontraban apagados o los números fueron cambiados. Así también, se les requirió documentaciones relacionadas a las operaciones con **NN** así como también sus Libros

de Compras y Ventas, pero en vista de que no respondieron a los requerimientos de la **AT** se procedió al bloqueo de sus respectivos RUC.

Por todas las razones expuestas, el **DSR2** concluyó que las supuestas compras declaradas por el contribuyente sumariado y respaldadas con comprobantes emitidos por los proveedores irregulares mencionados deben ser impugnadas.

Así mismo, el **DSR2** verificó que realizaron una entrevista informativa al sumariado **NN**, y mencionó lo mismo que en su escrito de descargo, en este sentido indico que su actividad principal es Compra- Venta de productos vegetales y reconoció algunas ventas realizadas a diversas firmas, pero no los montos en las facturas que superaban los (40.000.000) cuarenta millones de guaraníes, además alegó que los talonarios de sus facturas se quemaron en un incendio.

Por otro lado, a fin de obtener más datos de los proveedores que no fueron ubicados en los domicilios y números telefónicos declarados en el RUC, el equipo auditor de la **GGII** procedió a investigar sobre la actividad comercial del sumariado por medio de las informaciones requeridas por la **AT** a la **DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN (DAMA)**, a la que se le solicitó su colaboración con respecto a informar si el mismo fue arrendatarios de locales en el Mercado de Abasto y los periodos fiscales en los cuales arrendaron. Por medio del Expediente N° 00, la **DAMA** señaló que en el listado se encontraba el nombre de **NN** como uno de ellos, con la aclaración de que los permisionarios no pueden subarrendar los locales.

Por otra parte, se solicitó a la actual Gerencia General de Aduanas (**GGA**) de la **DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (DNIT)**, sobre los datos de importación de los supuestos proveedores en cuestión, a lo que dicha institución a través del expediente N° 00 señaló que consultado el Sistema Informático SOFIA solamente obtuvieron datos de despachos de importación realizados por el sumariado **NN** y en cuanto a los proveedores de este, mencionó que no tienen información de registros de importación de productos.

Asimismo, se requirió a la Gráfica XX del **XX, XX** los documentos de respaldo de la Solicitud de Autorización de Timbrados y Reporte de Entrega de documentos preimpresos de las facturas vinculadas a los supuestos proveedores, los que fueron presentados por medio del expediente N° 00 verificándose que la firma estampada como del proveedor **XX** en los *Reportes de Entrega de Documentos Timbrados*, a simple vista difiere con la firma original estampada en el documento de identidad de mismo.

NN mencionó en su descargo: "...Se observa que los contribuyentes **XX, XX**, sus domicilios comerciales no fueron ubicados, siendo ubicado el Domicilio comercial del contribuyente y **XX** dentro del Mercado Central de Abasto. En este sentido considero responsabilidad del órgano encargado de control y vigilancia de los contribuyentes de la SET, los obligados a realizar las investigaciones de campo, en primer lugar si es real la existencia de estas personas físicas, solicitando informe al Departamento de Identificaciones sus respectivos prontuarios policiales donde constan sus domicilios reales, así comprobar si son personas existentes o no como también al Departamento del Registro Civil Persona para descartar o confirmar su defunción..." (sic).

Sobre el punto el **DSR2** expresó que el contribuyente en todo momento pudo haber solicitado el diligenciamiento de las pruebas, siendo este un derecho que le asiste conforme al Num.5 de los Arts. 212 y 225 de la Ley en los cuales dicen que dentro del proceso sumarial el juzgado de instrucción da apertura al Periodo Probatorio para que el sumariado solicite todas las pruebas que hacen a su derecho, pero en este caso particular **NN** simplemente no ejerció su derecho, por lo que no puede trasladar dicha carga a la **AT**, que cumplió con todas las disposiciones legales y reglamentarias que hacen a la sustanciación del Sumario Administrativo. Igualmente, el Art. 11 de la RG N° 114/2017 establece que el plazo del Período Probatorio será de quince (15) días, pudiendo ser prorrogado de oficio, de manera a que, existiendo pruebas pendientes de diligenciamiento, éstas puedan producirse en su totalidad, cuestión, que como ya hemos mencionado más arriba, no fue necesaria debido a que **NN** no diligencio sus pruebas. "...La carga de la prueba la asume plenamente el contribuyente y la misma debe ser indubitante e incontestable. Esta exigencia se debe al carácter extraordinario de la situación invocada, en la cual se esgrime, en la mayoría de los casos una

diferencia en el pago de impuestos...” (Revista Jurídica N° 2 Abogacía del Tesoro. ABT, Una visión jurídica desde el ámbito público”, página 140).

Para el **DSR2** es importante mencionar que en el Procedimiento Administrativo existe una serie de elementos que condicionan a la carga de la prueba, el cual principalmente es la presunción de Legalidad y Legitimidad de la que gozan los actos dictados por la **AT**, lo que implica que quien pretenda impugnar dichos actos debe probar sus alegaciones y **NN** simplemente no lo hizo.

En el escrito de descargo **NN** continuó diciendo: *“...Muchas veces el contribuyente no puede tener el control taxativo de los mismo sería imposible, reitero por el volumen mismo. La responsabilidad en posición de síndico del contribuyente en el comercio, como personas encargadas de la vigilancia en los diferentes ámbitos del manejo, en las compras, facturaciones o la contabilidad misma, normalmente se manejan con diferentes grupos de funcionarios encargados en la tarea encomendada en el local comercial, el contribuyente no es un profesional contador, podría darse el cambien sin discutir, en el caso del **XX** tuvo algunos cambios del profesional contador encargado de la contabilidad de su comercio, el mismo manifestó en su entrevista ante los interventores sumado al siniestro en su local comercial, que el mismo denunció en la comisaria **XX** de Asunción, agregado a este sumario como elemento probatorio...” (sic).*

El **DSR2** analizó lo planteado por el contribuyente y señaló que, con relación a la responsabilidad del contador, el Art. 180 de la Ley que dispone: *“La responsabilidad por las infracciones tributarias, independientemente de su tipificación y sanción en la legislación penal, es personal del autor, salvo las excepciones establecidas en esta ley. Están sujetos a responsabilidad por hecho propio o de personas de su dependencia, en cuanto les concierniere los obligados al pago o retención e ingreso del tributo los obligados a efectuar declaraciones juradas y los terceros que infrinjan la ley, reglamentos o disposiciones administrativas o cooperen a transgredirlas o dificulten su observancia”,* por lo que el **DSR2** concluyó que **NN** es el único responsable por la infracción cometida.

En este contexto, el **DSR2** señaló que el pedido de documentos fue realizado a través de la nota de Requerimiento de Documentos N° 00 del 24/08/2023 y que **NN** posterior a las entrevistas informativas realizadas en la **DGGC** realizó la denuncia policial y una vez requeridas las mismas manifestó que dichos documentos fueron extraviados según consta en foja 11 del Expediente N° 00. Al respecto el **DSR2** manifestó que el contribuyente debe necesariamente llevar su archivo tributario en las condiciones que establezcan las leyes y reglamentos dictados por la **AT**, y en virtud al Art. 9° de la RG N° 86/2012, que dicta que ante la pérdida, robo o deterioro del archivo tributario, el contribuyente se encuentra obligado a reconstruir su contabilidad, haciendo referencia a toda documentación que sirve de base para el registro de sus operaciones comerciales que constituye todo aquello que debe mantenerse obligatoriamente por el termino de prescripción, entiéndase comprobantes de compras, ventas y cualquier otro documento complementario propio y de uso corriente de la actividad gravada, es por ello que la justificación en la que se amparó **NN** no es suficiente para eximirlo de responsabilidad.

El contribuyente **NN**, también manifestó que: *“... Si las facturas ingresadas a la SET, que resulten dudosas sus contenidos de forma formal o parcial, las investigaciones deben de centrar al emisor contribuyente (PROVEEDOR RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL) no así al contribuyente que adquiere los productos en su buena fe, en su calidad de comerciante asentado con domicilio real comprobada de forma objetivo, en el caso del **XX** ...” (sic).*

En tal sentido, el **DSR2** precisó que el análisis se hace con respecto al **uso de facturas** referentes a operaciones materialmente imposibles de haberse llevado a cabo, no solo se limita al cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de las facturas, sino también con respecto al contenido de las mismas, verificando que la operación haya existido y que efectivamente se haya producido la compra - venta entre

quien dice ser el comprador y el vendedor, de manera a que puedan ser utilizadas como respaldo para la liquidación de los impuestos, esto conforme lo señalado por los Arts. 8º, 85 y 86 de la Ley.

Igualmente, el **DSR2** resaltó que, si bien la **AT** es el órgano encargado de autorizar la emisión de los mismos y otorgó el timbrado, la responsabilidad de la misma se limita a la verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter formal establecidos en la reglamentación, sólo a efectos del otorgamiento del timbrado, siendo de exclusiva responsabilidad del vendedor y del comprador lo consignado en los comprobantes. Por lo cual, el timbrado del documento no constituye garantía alguna para demostrar que la operación efectivamente se realizó.

Ante lo expuesto, el **DSR2** recalcó que el presente Sumario Administrativo versa sobre los impuestos y las multas a ser determinadas por la **AT** en virtud de los Arts. 212 y 225 de la Ley respecto a los beneficios indebidos que **NN** hizo valer ante el Fisco, considerando que el contribuyente sumariado utilizó indebidamente los créditos fiscales correspondientes a las facturas de contenido falso en el IVA General de los periodos fiscales de 01/2018 a 05/2020, de 01 a 03, 05, de 10 a 12/2021, de 01 a 09, 12/2022; y respecto al IRACIS General ejercicios fiscales 2018 y 2019 y el IRE General de los ejercicios fiscales 2020 al 2022, utilizó las facturas de contenido falso como crédito fiscales costos y gastos, con el fin de disminuir la base imponible para el pago de los citados impuestos.

En consideración a todo lo expuesto, el **DSR2** resaltó que la normativa tributaria dispone que los montos de las operaciones consignadas en las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) de los contribuyentes deben cumplir con los requisitos formales señalados en la Ley y las reglamentaciones en el sentido de que, además de estar debidamente documentados, indefectiblemente deben corresponder a una erogación "**real**" que implique un hecho económico que se haya indubitablemente efectuado; y que los comprobantes registrados por **NN** fueron impugnados porque los mismos no reflejan la realidad de las operaciones ya que corresponden a facturas cuyos contenidos describen operaciones y montos inexistentes, por lo que no dan derecho a su deducibilidad.

Finalmente, el **DSR2** resaltó que ninguno de los hechos antes mencionados fueron rebatidos por **NN**, ya que no presentó elementos conducentes que desvirtúen lo denunciado por los auditores de la **GGII** en su contra, en consecuencia, corresponde confirmar que el sumariado declaró montos menores en sus ventas y sus compras fueron respaldadas con facturas de contenido irregular, con los cuales hizo valer créditos inexistentes, y abultó los costos y gastos en sus DD.JJ. del IRACIS General y del IRE General, y las demás evidenciadas detectadas durante la Fiscalización Puntual; en consecuencia, el **DSR2** concluyó que **NN** registró en sus DD.JJ. de los periodos y ejercicios fiscales controlados, comprobantes cuyos contenidos describen operaciones y montos inexistentes, a fin de respaldar sus créditos fiscales, sus costos y gastos, por lo que el **DSR2** consideró que las supuestas compras declaradas por el sumariado deben ser impugnadas, ya que las mismas se hallan en infracción a lo establecido en el todo esto en infracción a lo dispuesto en los Arts. 7º, 8º, 22, 85 y 86 de la Ley, concordante con el Art. 68 del Decreto N° 1030/2013 y los Arts. 8º, 85 y 86 de la Ley N° 6380/2019 respectivamente, obteniendo así un beneficio indebido en perjuicio del Fisco, que se halla representada por los montos que el contribuyente dejó de ingresar oportunamente.

En este sentido, para la calificación de la conducta y la aplicación de sanciones, el **DSR2** resaltó que el Art. 172 de la Ley claramente dispone que debe existir una conducta (acción u omisión) realizada por el contribuyente con el fin de provocar un engaño o perjuicio al Fisco, el cual no solo está representado por el monto que dejó de ingresar en concepto de tributo sino por la irregularidad en la declaración de sus gastos, costos y créditos fiscales configurándose la presunción de Defraudación establecida en el Num. 12) del Art. 174 de la Ley. En este contexto, la propia Ley establece que de confirmarse alguna de las presunciones establecidas en el Art. 173 del mismo cuerpo legal, se comprueba que el actuar del contribuyente fue con intención, y en el caso particular ha quedado plenamente demostrado que **NN** registró y declaró facturas de contenido falso, abultó sus costos, gastos y utilizó el crédito fiscal de forma indebida, lo que implicó el no ingreso del impuesto correspondiente, la presentación de DD.JJ. con datos falsos y el suministro de informaciones inexactas sobre sus operaciones comerciales Num. 1), 3) y 5) del Art. 173 de la Ley. Por tanto, conforme a las evidencias obtenidas, se confirma

que se cumplen todos los presupuestos para calificar su conducta de acuerdo al tipo legal previsto en el Art. 172 de la Ley.

A fin de establecer la graduación de la sanción, el **DSR2** señaló que, si bien existieron circunstancias agravantes, destacó que para la aplicación de la sanción, es preciso considerar la finalidad de la misma, que además de la reparación del daño, debe ser lo suficientemente disuasiva para inducir al contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones, sin que ello signifique un sustancial menoscabo a su patrimonio, al punto de provocar el cierre o cese definitivo de las actividades comerciales del infractor.

Por esta razón y en cumplimiento del Principio de Proporcionalidad, que faculta a la **GGII** a determinar la cuantía de la sanción entre un mínimo y un máximo, el **DSR2** analizó los diferentes elementos y peculiaridades del caso en general y del contribuyente en particular; y consideró las circunstancias agravantes y atenuantes del caso, especialmente las previstas en los num. 1), 2), 5), 6) y 7) del Art. 175 de la Ley; y por tanto, consideró pertinente la aplicación de la multa del 255% sobre el tributo defraudado.

En consecuencia, con base en las consideraciones de hecho y de derecho expuestas anteriormente, el **DSR2** concluyó que corresponde determinar la obligación fiscal en concepto de impuestos, aplicar la multa y dictar el acto administrativo.

POR TANTO, en uso de las facultades conferidas en la Ley.

EL GERENTE GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RESUELVE

Art. 1º:Determinar la obligación fiscal del contribuyente **XX** con RUC **00**, conforme a las razones expuestas en el Considerando de la presente Resolución de acuerdo al siguiente detalle:

Obligación	Periodo	Impuesto	Multa	Total
511 - AJUSTE IRACIS	2018	294.096.879	749.947.041	1.044.043.920
511 - AJUSTE IRACIS	2019	148.032.858	377.483.788	525.516.646
800 - AJUSTE IRE GENERAL	2020	15.927.725	40.615.699	56.543.424
800 - AJUSTE IRE GENERAL	2021	124.479.673	317.423.166	441.902.839
800 - AJUSTE IRE GENERAL	2022	477.729.776	1.218.210.929	1.695.940.705
521 - AJUSTE IVA	01/2018	3.855.714	9.832.071	13.687.785
521 - AJUSTE IVA	02/2018	8.424.779	21.483.186	29.907.965
521 - AJUSTE IVA	03/2018	11.423.635	29.130.269	40.553.904
521 - AJUSTE IVA	04/2018	2.120.692	5.407.765	7.528.457
521 - AJUSTE IVA	05/2018	5.101.967	13.010.016	18.111.983
521 - AJUSTE IVA	06/2018	7.981.438	20.352.667	28.334.105
521 - AJUSTE IVA	07/2018	6.603.350	16.838.543	23.441.893
521 - AJUSTE IVA	08/2018	7.860.264	20.043.673	27.903.937
521 - AJUSTE IVA	09/2018	10.021.560	25.554.978	35.576.538

521 - AJUSTE IVA	10/2018	11.041.968	28.157.018	39.198.986
521 - AJUSTE IVA	11/2018	46.221.905	117.865.858	164.087.763
521 - AJUSTE IVA	12/2018	26.199.661	66.809.136	93.008.797
521 - AJUSTE IVA	01/2019	10.641.967	27.137.016	37.778.983
521 - AJUSTE IVA	02/2019	3.598.254	9.175.548	12.773.802
521 - AJUSTE IVA	03/2019	1.608.745	4.102.300	5.711.045
521 - AJUSTE IVA	04/2019	1.399.480	3.568.674	4.968.154
521 - AJUSTE IVA	05/2019	3.496.363	8.915.726	12.412.089
521 - AJUSTE IVA	06/2019	2.605.000	6.642.750	9.247.750
521 - AJUSTE IVA	07/2019	5.668.757	14.455.330	20.124.087
521 - AJUSTE IVA	08/2019	18.148.783	46.279.397	64.428.180
521 - AJUSTE IVA	09/2019	3.986.921	10.166.649	14.153.570
521 - AJUSTE IVA	10/2019	7.584.297	19.339.957	26.924.254
521 - AJUSTE IVA	11/2019	5.698.040	14.530.002	20.228.042
521 - AJUSTE IVA	12/2019	8.136.117	20.747.098	28.883.215
521 - AJUSTE IVA	01/2020	9.819.923	25.040.804	34.860.727
521 - AJUSTE IVA	02/2020	6.207.813	15.829.923	22.037.736
521 - AJUSTE IVA	04/2020	3.509.790	8.949.965	12.459.755
521 - AJUSTE IVA	05/2020	889.508	2.268.245	3.157.753
521 - AJUSTE IVA	01/2021	4.404.851	11.232.370	15.637.221
521 - AJUSTE IVA	02/2021	8.043.400	20.510.670	28.554.070
521 - AJUSTE IVA	03/2021	3.996.856	10.191.983	14.188.839
521 - AJUSTE IVA	05/2021	2.564.476	6.539.414	9.103.890
521 - AJUSTE IVA	10/2021	3.989.709	10.173.758	14.163.467
521 - AJUSTE IVA	11/2021	12.930.683	32.973.242	45.903.925
521 - AJUSTE IVA	12/2021	11.278.704	28.760.695	40.039.399
521 - AJUSTE IVA	01/2022	24.495.722	62.464.091	86.959.813
521 - AJUSTE IVA	02/2022	24.061.063	61.355.711	85.416.774
521 - AJUSTE IVA	03/2022	35.590.459	90.755.670	126.346.129
521 - AJUSTE IVA	04/2022	8.130.579	20.732.976	28.863.555
521 - AJUSTE IVA	05/2022	19.790.209	50.465.033	70.255.242
521 - AJUSTE IVA	06/2022	18.232.029	46.491.674	64.723.703
521 - AJUSTE IVA	07/2022	26.811.247	68.368.680	95.179.927
521 - AJUSTE IVA	08/2022	15.553.638	39.661.777	55.215.415
521 - AJUSTE IVA	09/2022	2.583.636	6.588.272	9.171.908

521 - AJUSTE IVA	12/2022	27.474.909	70.061.018	97.535.927
Totales		1.550.055.772	3.952.642.221	5.502.697.993

**Obs.: Los accesorios legales serán calculados conforme lo dispuesto en el Art. 171 de la Ley N° 125/1991.*

Art. 2°: CALIFICAR la conducta del contribuyente **XX**, con **RUC 00**, de conformidad a lo establecido en el Art. 172 de la Ley N° 125/1991; y **SANCIONAR** al mismo con la aplicación de la multa equivalente al 255% sobre los tributos defraudados, de acuerdo con las razones expuestas en el Considerando de la presente Resolución.

Art. 3°: NOTIFICAR al contribuyente conforme a la RG N° 114/2017 y modificada por la RG N° 52/2020, a fin de que proceda a dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución, bajo apercibimiento de Ley.

Art. 4°: INFORMAR lo resuelto a la Dirección General de Recaudación y de Oficinas Regionales, a fin de que tome conocimiento de los términos de la presente Resolución, y cumplido archivar.

EVER OTAZÚ
GERENTE GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS